EL FORO ESPAÑOL.

PERIÓDICO

DE JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRACION.

Núm. 18.

Madrid 30 de Junio de 1850.

6 rs. al mes.

RIFA.

Habiendo procedido la Redaccion del *Foro Español* á la rifa del Regalo ofrecido en el prospecto á los suscritores que lo han sido durante el semestre de 1.º de Enero á fin de Junio del corriente año, han sido agraciados los números siguientes que le han correspondido á los Señores que á continuacion se espresan, en los puntos en que se determinan. Las Secciones que se marcan corresponden á sus cientos oportunos, ó mejor dicho, cada Seccion representa un ciento. Hé aquí el resultado de la rifa con el número, nombre y apellido de los sugetos favorecidos por la suerte, que podrán reclamar las obras con que han sido agraciados.

PRIMERA SECCION.

Núm. 87.—D. ANTONIO MARTINEZ GIL,
Juez de primera instancia, de
Gerona.

TOMO III.

SEGUNDA SECCION.

Núm. 76.—D. PEDRO RUBIO DE TORRES,
Promotor fiscal, de Alicante.

TERCERA SECCION.

Núm. 15.—D. EDUARDO GONZALEZ, de
Madrid.

CUARTA SECCION.

Núm. 31.—D. JOSÉ BENEYAN, de Va-
lencia.

IMPORTANTISIMO.

Debemos advertir á nuestros suscritores que desde 1.º de Julio empezará á tirarse *El Foro Español* en la Imprenta de la Viuda de Palacios é hijos. En su virtud todas las cartas, avisos de suscripcion y comunicaciones de cualquier género, se dirigirán desde hoy en adelante, *francas de porte*, á dichos señores, Imprenta de la Viuda de Palacios é hijos, Carrera de San Francisco, núm. 6, cuarto principal: cesando por este

motivo en su administracion D. Francisco Almenara, que la desempeñaba con tan reconocido celo y exactitud.

ADVERTENCIA.

Los señores cuya suscripcion concluye hoy, tendrán la bondad de renovarla lo mas pronto que les sea posible, dirigiéndose á la referida Sra. Viuda de Palacios, para evitar molestias y retrasos perjudiciales á la empresa, y muy particularmente á los mismos interesados.

Nuestros lectores habrán observado que hemos cumplido con la promesa que hicimos á principios de año, y que ademas hemos publicado varias biografias de Jurisconsultos célebres con retrato, que ofrecemos continuar dando, á pesar del escetivo costo del grabado. Los artículos de fondo, las consultas, la interesante y amena seccion de variedades, y la parte oficial en fin, han correspondido á la confianza que inspira un periódico de Jurisprudencia, que hasta la hora presente no ha tenido interrupcion alguna ni recibido amonestacion de las autoridades, porque no la ha necesitado en justicia escribiendo con decoro, y con una estricta imparcialidad. Facultados como están los señores suscritores para remitir todos los trabajos dignos que deban ver la luz pública, hemos insertado muchos, dando con ello una prueba del respeto en que tenemos

sus opiniones, y complaciendo sus deseos de una manera que pocos periódicos acostumbran. En vista de este proceder tenemos derecho á que se nos crea al asegurar que en el semestre venidero serémos consecuentes con él, y que darémos ancha cabida á todo género de reformas, y acogerémos las indicaciones que hagan nuestros compañeros como hasta aquí.

En cuanto á los trabajos que deban ver la luz publica, sin contar con varios que están prontos para impresion, escritos algunos por jurisconsultos de nombradía, están esperando turno los siguientes:

BIOGRAFIAS DE JURISCONSULTOS.

- 1.^a Del Conde de Florida Blanca. =
- 2.^a De D. Gaspar Melchor de Jovellanos. =
- 3.^a De D. Luis de Urquijo. =
- 4.^a De Don Pedro Ceballos. =
- 5.^a De Villala, Gobernador del Consejo. =
- 6.^a De Pulg. =
- 7.^a De D. Lorenzo Arrazola. =
- 8.^a De D. Manuel Cortina, etc., etc.

En cuanto á artículos, los siguientes=

Ademas de varios de diferentes materias escritos por personas de conocida reputacion, el señor Castellanos, de quien no podemos menos de hacer una honrosa mencion en este sitio por la novedad de que ha sabido revestir la seccion de *variedades* del periódico, no menos que por la erudicion que revela en sus trabajos, y por esa exploracion que ha hecho de antigüedades jurídicas, se propone dar los que se dicen á continuacion.

De los matrimonios en general de España y legislacion antigua y moderna sobre ellos. = De las cencerradas en las bodas de los viudos. = Legislacion sobre adúlteros, emplumados y azotados. = De las leyes godas. = De los alborozos y alcabalas. = De los

gitanos en España con respecto á sus leyes.—De los judíos españoles, y leyes dadas sobre ellos.—De las brujas, vampiros, redivivos, fantasmas, zaboríes y leyes que les conciernen.—De los saludadores y ensalmadores.—De los hechiceros, adivinos, sorteros y nigrománticos: y en general, otra multitud de artículos á cual mas curiosos.

REGALO.

Habiéndonos manifestado algunos suscritores el gusto que tendrian en poseer encuadrado aparte un ejemplar de los *Estadutos* generales de los Colegios de Abogados, con el objeto de dar una cumplida muestra de nuestro deseo de complacerles, ofrecemos un ejemplar á todos los que lo sean en el semestre que comienza en julio, acompañándolo al primer número del periódico.

Exámen de las reformas y adiciones hechas recientemente al Código Penal.

II.

Continuando la tarea que comenzamos en el número anterior, no podemos menos de decir que hemos visto con placer la adición que se ha hecho al art. 355 del Código Penal, porque fundados en una reserva hasta cierto punto laudable sus autores al tratar de los delitos de deshonestidad, se habian desentendido de penar una multitud de desacatos contra el pudor y la decencia, sin duda por no determinarlos espresamente. Aquí se ven palpablemente los inconvenientes

que tiene un Código casuístico, que á veces no puede callar aunque quiera por haberse constituido en el deber de enumerar todos los casos que pueden ocurrir en la práctica. El Código se ocupa en este artículo de los que *abusaren deshonestamente de persona de uno ú otro sexo*, y no pudo prever que andando el tiempo, habia de ocurrir en un juzgado de una capital un escándalo inaudito, en el que sin que existiera *abuso de persona* se cometió un delito contra las costumbres, que escitó las quejas de la poblacion. Sin embargo el delincuente con arreglo al Código no debia ser considerado sino como autor de una *falta*. Afortunadamente la ley ha venido con su claridad ahora en apoyo de la decencia pública, diciendo que, «serán castigados con la pena de arresto mayor á prision correccional y reprension pública los que de *cualquier modo* ofendieren el pudor ó las buenas costumbres con *hechos de grave escándalo y trascendencia* no comprendidos espresamente en otros artículos de este Código.» El artículo tal cual se hallaba redactado antes, no parecia comprender sino aquellos delitos que los canonistas distinguen con los nombres de *mastupratió* y *mollities*, resultando que no podian penarse esos hechos impúdicos con que el hombre ó la mujer ofenden la moral, aunque no medie mas que una simple proposicion. Al presente han desaparecido con dos sencillas palabras las omisiones del Código respecto á este punto, si bien hubiéramos deseado un párrafo mas en que se castigáran los hechos punibles de esas mujeres, que no solo infringiendo las faltas de policia de que se ocupa el libro 3.^o, sino cometiendo un verdadero delito, se ejercitan en un comercio ilícito, con grave ofensa de la moral pública, que ve relajarse cada dia los vínculos

del matrimonio, de la familia y de la patria potestad.

El art. 381 ha sufrido grandes modificaciones, pues que las injurias ó calumnias que antes no podían ser penadas sino á instancia de la parte agraviada, lo pueden ser ahora de oficio, previa escitación especial del Gobierno cuando se dirijan contra la autoridad pública, corporaciones ó clases determinadas del Estado, comprendiéndose en la palabra Autoridad los Soberanos y Príncipes de naciones amigas ó aliadas, y los agentes diplomáticos. Siendo una medida de actualidad la que se adopta en esta nueva disposición, distamos mucho de querer entrar en la discusión de su conveniencia. Nos parecen atinadas las alteraciones que han sufrido los artículos 417 y 421, y acaso no tanto la hecha al párrafo 2.º del art. 424, porque siempre hemos deseado una perfecta graduación en las penas, y conceptuamos que se castiga acaso con exceso el robo que no escede de cinco duros con presidio correccional.

Aparte de ser una grave falta el no expresar el grado que debe aplicarse, no creemos que á un robo de esta especie debe imponerse una pena que comprende un período de tiempo de 7 á 36 meses, á no ser que la persona robada no tenga mas bienes que la citada cantidad. Estamos en parte conformes con las enmiendas que han sufrido los artículos 426, 427 y 428, que tratan de los hurtos, pero no lo estamos en manera alguna con que el Código no se explique terminantemente acerca de la pena que debe imponerse al que hurte mas de 500 duros. Se ocupa solo de esos hurtos pequeños, cometidos á veces por un miserable con objeto de saciar el hambre ó dar sustento á su familia, y no de los grandes en los que se sustraen inmensas sumas de

dinero, á veces sin esa necesidad, y con un descaro impudente. A los ojos de una persona cualquiera, son sin embargo mas culpables estos últimos, cometidos por hombres de cierta posición oficial y política, que usando mal de la confianza que el Estado ha depositado en ellos, defraudan los fondos públicos puestos á su cuidado. En esta época mas que en ninguna, en que se han dado frecuentes y repetidos escándalos de descarada inmoralidad, convenia que la ley penal hubiera sido inflexible, aún mas con los hurtos grandes que con los pequeños, oponiendo así un fuerte dique á la corrupción de la época y al deseo inmoderado de medrar y hacer fortuna por reprobados medios. Seria de desear, pues, que se hubiera establecido esa graduación de que ya hemos hablado, por medio de la cual el delincuente sufriera mas pena á medida que fuese mayor la cantidad que hubiera hurtado. Esta graduación sobre ser justa, la reclama el interés social.

Poco nos ocuparemos de las reformas que ha sufrido el libro 3.º, que trata de las faltas, porque algunas son puramente gramaticales, y otras aconsejadas por la necesidad de variar la numeración y el sentido confuso de sus artículos. Contrariado en algunos puntos este libro por las disposiciones del poder administrativo, que ha reclamado en varios Juzgados el exclusivo conocimiento de ciertos negocios que juzgaba gubernativamente, ha venido á ser campo de lucha de las dos jurisdicciones y motivo de grandes desaciertos, á los que solo puede poner término una jurisprudencia clara y un verdadero deslinde de atribuciones.

Respecto á las reformas de la ley provisional, observamos una de gran importancia, que es la hecha en la regla 2.ª, en la

cual al tratar de las pruebas que han de tener presentes los tribunales para imponer las penas, se dá como bastante « el convencimiento de la criminalidad del acusado, según las reglas ordinarias de la crítica racional, » en vez de la palabra *certeza* de que antes se usaba.—Una práctica elocuente ha aconsejado la necesidad de esta enmienda, á causa de la imposibilidad que habia antes de adquirir esa certeza, que es cuasi imposible de poseer por nuestro defectuoso sistema de pruebas. Aquí se reconoce lo mucho que vale el convencimiento de que se ha perpetrado un delito por el que lo ha de juzgar, y se sanciona al arbitrio judicial en cierto modo.

Es muy difícil probar la certeza de un hecho en un procedimiento escrito, motivo por el cual se tiene que admitir el convencimiento, que pocas veces es errado y que sobre todo da seguridades de que no se ha de verificar la impunidad como hasta aquí ha sucedido en algunos casos. El artículo reformado muy oportunamente prescribe que: dado caso que no pueda encontrarse la evidencia moral que requiere la ley 12, tit. 14 de la Partida 3.^a, se imponga en su grado mínimo la pena señalada en el Código, con lo cual se evita también la aplicación del máximo de la ley, que solo debe tener lugar cuando exista una verdadera *certeza* del delito y sus autores. Muchos males se hubieran evitado con que esta enmienda que ahora aparece tan recomendada por la necesidad, se hubiera hecho en el año de 1847 en que tanto se pidió, por conocerse que era imposible aplicar la pena del Código, si para evitar la impunidad no se habia de saltar por cima de sus preceptos. El remedio aunque tardío ha sido cierto y no dudamos que será eficaz, si los jueces consultando esa *crítica racional* que

es la conciencia ilustrada con el conocimiento del proceso, y desentendiéndose de las pasiones personales arreglan sus fallos á justicia. Así como con la imparcialidad que nos caracteriza elogiamos esta reforma, así censuramos el párrafo 1.^o de la regla 3.^a en que no hay orden gramatical, ni lógica, sino un notable contrasentido. Dice así: « *A escepcion del acta del juicio los alcaldes y sus tenientes no admitirán ningun género de escritos, ni autorizarán informes orales de letrados.* » Primeramente el acta del juicio no se admite como una demanda cualquiera sino que es producto del juicio mismo, y en segundo lugar es inútil prevenir que no admitan escritos, porque ya se sabe que el juicio es verbal, y en él no se presentan escritos. Repetimos que es poco meditada la redacción de este párrafo, porque el alcalde no tiene que *admitir* nada sino á los interesados á su presencia, delante de quienes despues de oír *in voce* sus pretensiones formula su sentencia, que se reduce á escrito. Aun menos calculado está el segundo período de este párrafo « *ni autorizarán informes orales de letrados* » porque ha debido decirse *ni tolerarán ó permitirán*, que es lo que seguramente se ha querido espresar, porque la voz *autorizar* tiene en nuestro idioma otro sentido muy diverso. Llamamos pues muy particularmente la atención del señor Ministro de Gracia y Justicia sobre este párrafo que está plagado de inexactitudes, con tanto mas motivo cuanto que puede inducir á grandes errores, que no dudamos se apresurará á corregir dicho señor, si estima como creemos justas, nuestras observaciones.

Mucho nos placen los artículos que tienen por objeto la seguridad de la libertad civil de las personas, y el que los presos no estén en las cárceles mas que el tiempo

preciso para cerciorarse de su inocencia ó culpabilidad. El art. 34 de las nuevas reformas á la ley provisional, impone responsabilidad á la autoridad que tenga detenida á su disposicion á cualquiera por mas de tres dias. Fielmente observada esta disposicion no se repetirá el caso que se verificó en años anteriores en esta córte, de que tuviera un jefe político siete meses á su disposicion en la cárcel pública á una pobre mujer á quien se encontró ébria, á la que no recordaba con qué motivo habia mandado detener: sufriendo esta injusta detencion á pesar de haberse oficiado por el juez del distrito pidiendo á aquella autoridad, pruebas para proceder contra la infeliz, que ofrecia siempre mandar á la mayor brevedad. Ahora no deberán presenciarse estos punibles descuidos.

Muchas mas observaciones pudiéramos hacer sobre las reformas que nos ocupan, pero por hoy nos tenemos que reducir á ciertos limites, sin perjuicio de discutir en adelante algunas de sus disposiciones especiales.

NOTARIADO. (1)

ARTÍCULO SESTO. (2)

Los escritores sábios de la edad contemporánea, las personas entendidas de los países civilizados, los hombres, por último,

(1) En el núm. 16, art. 5.º, entrega anterior, pág. 263, columna 1.ª, donde dice: *propios en tales actos*, debió decir: *propios de tales actos*. En la misma página y columna dice: *no reparan en los años*, y debe leerse: *no reparan en los daños*.

(2) Con el artículo anterior terminó la primera parte de las tres en que tenemos pensado dividir este trabajo,

de buen criterio que constante y asiduamente se vienen dedicando á estudiar la progresiva marcha del *tiempo*, de ese juez inexorable é imparcial que da á cada uno lo que con verdad le pertenece, y que con la energía de su potente brazo así vuelca ó eleva, destruye ó crea, hunde ó levanta grandes y pequeñas instituciones á merced del soplo impetuoso é incontrastable de la época por que discurre, convienen todos unánimes y de acuerdo comun, como si se hubiesen concertado previamente, en que la sociedad actual está pasando por una crisis espantosa, tremenda; por una prueba dura, vacilante, horrible; por un juicio, en fin, recto, escrupuloso, decisivo, cuyo fallo inapelable será la sentencia de su regeneracion salutar y completa, ó de su desolacion, desconcierto y esterminio.

Ya en el último siglo caracterizado con bastante propiedad por un laborioso ingenio con la clasificacion de *del despertamiento de los pueblos*, se empeñó la lucha cruel y sin tregua por que están atravesando con la avidéz impulsiva y apremiante del que anhela el triunfo, pero que teme perderle si los medios que emplea para llegar al término de su deseo no son tan infalibles como apeteciera, y que quizá no elige otros por-

tratando la primera, como habrán notado nuestros lectores, *De la importancia del Notariado en todos los tiempos, de sus privilegios y honores en lo antiguo, y de las causas que han producido los abusos que le han colocado en el estado actual*. En la segunda hablaremos: *De las disposiciones adoptadas por los gobernantes para la reforma del Notariado hasta nuestros días, y su análisis*; y en la tercera esp pondremos *las Reformas y mejoras de que es susceptible el Notariado, y la manera de establecerlas*. Las materias que quedan pendientes se irán discutiendo segun puedan acomodarse mejor á las sucesivas por no ser susceptibles de ocupar por sí un artículo completo y análogo.

(Notas del Autor.)

que le son desconocidos ó los cree impracticables. Lució luego el astro que se dice guiar los talentos del siglo XIX, y el desarrollo de las funciones intelectuales invadió como un ejército conquistador en los ánimos de los individuos de todas las clases preparados de antemano casi intuitivamente por los efluvios que emanaban de la edad que precedió. Con entusiasmo fervoroso y osado enarbolaron el pendon de las reformas, creyéndose conducidos en alas del género regenerador, y el espíritu de innovacion se propagó como la electricidad á cuantos individuos forman la gran cadena social. Todos parece que se adunaron como impedidos por una fuerza superior, y cada uno desplegó su ingenio ofreciéndole como en gustoso sacrificio en favor de sus corréligionarios. Asi se nos presentan por dó quiera libros y escritos sin cuento que del mismo modo tratan de ciencias, artes y oficios que de la manera de reformarse; porque todas y cada una de las materias y partes que en si encierra cualquiera profesion científica, artistica ó mecánica se ha revuelto y tratado, inspeccionado y analizado hasta lo infinito por todos los medios, métodos y sistemas ya conocidos, ó inventados por los hombres que todo lo vienen estableciendo de nuevo, como si el ambiente de la moderna creacion fuese lo único que les pudiese prestar vida material y positiva. Los cofrades de la flamante civilizacion diseminados y esparcidos á manera de fructifera semilla por las poblaciones del globo, se mantienen en constante reproduccion y aumento difundiendo de un modo maravilloso sus científicas luces, cual otro luminar del dia por toda la redondez de la tierra. La voz de *civilizacion* ha resonado, y los cuerpos sociales de este siglo que han creído llegada la hora de su reconstitucion, se han dispu-

tado la primacia, y á su vez han corrido á prestar cuantos conocimientos les ha parecido se necesitaban para su reforma y regeneracion. Hermosas, brillantes teorías se han planteado en la mayor parte de los ramos sujetos á la dominacion del hombre. Estensa, profunda y latamente se ha ilustrado, discutido y disertado cada uno de ellos. Y á pesar de todo esto no podemos menos de esclamar, y con nosotros todas las personas que á reflexionar seriamente sobre tan importante y delicada cuestion se han dedicado: ¿En qué estado nos encontramos? ¿á qué grado de felicidad nos ha conducido la reforma social del siglo?...

Triste y dolorosa, al par que increíble se presenta á nuestra consideracion la historia de los *cincuenta años* que van á espirar, sin que en estas cinco décadas narrar podamos ningun adelanto positivo, ningun resultado halagüeño, ninguna mejora real y efectiva. Pero en cambio y formando un contraste admirable, y poco lisongero, tenemos la confusion mas lamentable en todas las ideas; el trastorno mas lastimoso en todas las materias, y el error y la duda, y el materialismo y la audacia mas odiosa en todos los individuos que se hinchan, envanecen y engrien de una manera escandalosa y punible confundiendo torpemente la libertad del pensamiento con la libertad de conciencia, de donde nace la desenfrenada contravencion á las leyes y buenas costumbres, y el desórden y la desmoralizacion que cunde y se estiende á medida que los conocimientos acrecen y que los talentos se cultivan y pulen. ¿De qué manera, pues, se esplica esto? Mejor que nosotros pudiéramos, lo hace un conocido y erudito escritor, fundado en los argumentos serios, eficaces y concienzudos que antes suscita, y concluye tambien á su vez preguntando:

«¿Qué le falta á esta civilizacion para ser tan provechosa como debiera ser á los hombres y á los pueblos? ¿en qué consiste que ni los hace mas virtuosos ni les labra la felicidad?»

Y contesta á continuacion de conformidad absoluta con nuestras creencias: «Harto se deja comprender, y harto se debe inferir de las ideas que en las conferencias anteriores he enunciado. *En que le falta la base de la felicidad de los hombres y de los imperios; en que hemos perdido en costumbres lo que hemos ganado en ilustracion; en que el órden de la civilizacion está invertido; en que el egoismo ha reemplazado á la moralidad y el sórdido interés á la virtud.*»

Y forma despues un largo catálogo de consideraciones en apoyo de su doctrina, del que tambien se nos permitirá copiar las que sirvan de corroboracion y sosten á la nuestra, por la mayor analogía que tienen con el asunto á que pensamos aplicarla.

«Veo el favoritismo, dice, reemplazar el lugar del mérito y la modestia interpretarse por simplicidad.»

220. «Yo veo entronizada esa especie de filosofia práctica, que en espresion de un célebre orador revolucionario, «convirtiendo» el egoismo en sistema, mira á la sociedad humana como una guerra de astucia, la fortuna como la regla de lo justo y de lo injusto, la probidad como un negocio de placer ó de decoro, y el mundo como el patrimonio de los bribones mas diestros.»

92. «Yo veo ajustar á los hombres como mercancías y poner los talentos á jornal, y regatearlos como los trabajos de un ganapan.»

201. Luego para confirmar mas y mas su asercion, y despues de otras reflexiones no menos ciertas, aunque no son de este caso,

y por eso las omitimos, prosigue: «He dicho que lo que en mi entender ocasiona que la civilizacion corrompa la sociedad en lugar de moralizarla, y haga á los hombres desgraciados debiendo hacerlos felices, es que el sistema universal de los gobiernos está viciado, es que el órden de la civilizacion está invertido, es que se dá el último lugar á lo que debiera ocupar el primero.»

«Yo acuso, continúa, solemnemente, digo con el ilustrado LAURENTIE, yo acuso solemnemente á nuestra época de cuidarse mas de la *instruccion* que de la *educacion moral* de las nuevas generaciones. Se multiplican las escuelas, es verdad, ¿pero se piensa en moralizar la sociedad? *Los bienhechores de la humanidad*, dice este escritor filosófico, *son los que se consagran á hacer reinar la virtud en el mundo*. Si los estudios, añade, no se han de encaminar al perfeccionamiento moral del hombre, *maldeciria hasta la instruccion*, la ignorancia acaso le seria mas provechosa. ¿Qué son las bellas artes sin la virtud? Acaso la futilidad de un dia, ó bien un alimento de vanidad. Las bellas letras templan la austeridad de las costumbres, hacen amable la virtud, pero ellas solas no hacen al hombre bueno, porque un gran artista, ó un gran literato puede ser tambien un gran malvado. Las bellas artes deben encontrar formado el corazon. Todo consiste en que el órden de la civilizacion está invertido.»

A riesgo de parecer prolijos, no omitiremos tampoco tres citas que hace á continuacion, porque en nuestro juicio encierren cuanto puede decirse con verdad sobre el tema que discutimos ahora, y que aunque parezca inconexo con la materia principal que nos ocupa, pronto esperamos disipar esta creencia momentánea, sin embargo que estamos seguros tambien, que los que

lo lean con el detenimiento é interés que el asunto exige, no nos acusarán de inconsecuentes. Sigue, pues, así:

«La moral, dice otro escritor contemporáneo no menos erudito (1), tiene una influencia inmensa sobre los destinos públicos de las naciones..... Pero la moral apenas se enseña sino en la niñez, ó bajo la tutela de la metafísica ó de la teología. *Es una de las lagunas mas profundas de la enseñanza moderna.* La moral debe siempre aplicarse al estado social del pais, á su política; pero debe *dominar esta política, debe descollar sobre toda la situacion de un pueblo.*» En nuestros dias la política es la que domina y avasalla la moral, si es que no la asesina. El orden de la civilizacion está invertido.»

«El *egoísmo* de las preocupaciones materiales, esclama otro escritor distinguido (2), la avidez de los goces que se tocan y se compran, la fiebre de las ambiciones envidiosas, la postracion de la dignidad humana ante el becerro de oro, hé aquí el mal que hay que temer y que convendria conjurar. Hé aquí el escollo de una *civilizacion*, cuyas ventajas por otra parte no desconocemos y nos guardaremos de maldecir. El espiritualismo cristiano será, lo esperamos así, el aroma divino que impedirá que se corrompa el mundo *apegado á la materia.* Si el soplo de Dios no corriera sobre estas olas, *cuya brillante superficie encubre tantos gérmenes de corrupcion*, seria menester desesperar del porvenir.»

«Digo por último con el sabio Filangieri: «Si los progresos de los conocimientos y de las luces nos han dado fuerza para do-

»minar la naturaleza y hacerla servir para
»nuestros designios; si la mano poderosa
»del hombre dirige el rayo, sujeta los vientos,
»impone leyes á las aguas; si el hombre se sostiene y viaja con alas artificiales
»sobre los espacios inmensos de los aires;
»si el adelantamiento, digo, de los conocimientos y de las luces nos ha dado tanto imperio sobre el mundo físico, ¿por qué
»no hemos de esperar adquirirlos tambien
»sobre el mundo moral? Cuando una sabia legislacion dirigiese el curso del espíritu humano, cuando apartándole de las
»vanas especulaciones le inclinase enteramente á objetos importantes para la felicidad de los pueblos, ¿la perpetuidad del
»bienestar de un pueblo y de su virtud
»no dejaria tal vez de ser tenida entonces
»por un problema irresoluble? (1)»

Y concluye diciendo: «En resumen, hermanos míos, yo amo la civilizacion literaria ó industrial, y la apetezco y la deseo; pero la quiero basada sobre la moralidad: quiero civilizacion, pero con costumbres publicas: quiero los adelantos industriales, pero con la educacion moral por cimiento: quiero las luces del espíritu, pero guiadas por los sentimientos nobles del corazon: en una palabra, quiero civilizacion, pero sin el egoismo y sin el sórdido interés que lo sujeta todo al cálculo de la especulacion y de las ganancias materiales; quiero la civilizacion pero *sin que la dignidad humana se humille y prosterne ante el BECERRO DE ORO*, sin que la humanidad se arrodille ante el *Hombre-moneda* (2).»

Ahora bien, si vemos claramente por lo espuesto que ni la sociedad en general,

(1) Mr. Matler, autor de varias obras de educacion y moral, entre otras una titulada: *De la influencia de las leyes sobre las costumbres.*

(2) Luis de Carné.

(1) Ciencia de la Legislacion, lib. IV, cap. 4.º

(2) Don Magin. Teatro social del siglo XIX, conf. 5.ª sobre la civilizacion, Tomo 1.º

ni las clases que en particular la constituyen pueden lograr ni conseguir ningun bien que no esté basado en la moral; si hemos demostrado que es imposible la verdadera felicidad no solo de un pueblo, sino de una clase, y hasta de un solo individuo que se separe de la virtud, ¿no podremos deducir una consecuencia muy lógica y legítima de todo esto y aplicarla sin ningun género de esfuerzo, coaccion ni violencia á la educacion que anhelamos, deseamos y apetecemos para los Escribanos? Despues de probar, como lo hemos ejecutado en los artículos precedentes, que no hay clase ni destino social que mas directa influencia ejerza en la vida civil de los hombres, ¿podrá todavía quedar la mas pequeña duda en que la base principal, el mas sólido cimiento y la piedra primera que debe colocarse para la formacion moral del Escribano es la virtud religiosa y sublime? Si cualquiera de las otras clases que ninguna relacion esencial tienen con las demas se desquiciaria y desmoronaria faltándole la moralidad cuya propiedad consiste en amalgamar suavemente los pesares y los goces, los deleites y sinsabores de la humana existencia, ¿causaria algun bien un solo individuo de la corporacion de Escribanos y Notarios públicos que no fuese un tipo perfecto de moralidad, pudiendo ser instrumento de los males que lamentamos ó de los bienes que apetecemos? El público funcionario que maneja las honras y las vidas de sus conciudadanos, que guarda sus secretos, que dá testimonio de sus actos, que aconseja, forma y autoriza las últimas voluntades de los hombres á las puertas del sepulcro, el Escribano, decimos, á quien todo se confia en la seguridad que debe inspirar siempre el santuario de la fé que le está encargada, ¿será fácil ni aun creíble

que corresponda dignamente á la grandeza de su ministerio, si antes no se le ha moralizado, si no se le hacen aprender los preceptos infalibles de la virtud, y la necesidad de practicarlos, y los inmensos perjuicios que engendra su inobservancia? No podrá menos de contestarse que de ninguna manera ni en sentido alguno cabe en lo posible.

Tambien el Cuerpo de Escribanos se sintió impulsado por el deseo de reorganizacion en el pasado siglo siguiendo el *despertamiento* general á consecuencia de un real decreto dirigido al Consejo de Castilla por la Magestad del Señor D. Fernando el VI á 6 de julio de 1747, por el que se ponian de manifiesto algunos abusos que en gran manera afectaban ya la grandeza de su institucion, tanto que aquel Monarca escitó al Consejo á que se *examinase este punto con el cuidado y premeditacion que pedia su importancia*, y que al efecto *estableciese las providencias y precauciones que considerase mas útiles para evitar en lo sucesivo tan notables daños*. En su vista el Consejo mandó informar á las Chancillerías y Audiencias del Reino, y con arreglo á lo que contestaron elevó una consulta al Rey en 14 de marzo de 1750, acompañada del oportuno dictámen con presencia de cuyos datos se sirvió S. M. resolver *que en atencion á que los principales inconvenientes y abusos de los Escribanos pendian de que las justicias y algunos de los mismos Escribanos ignoraban lo que era de su obligacion, segun lo dispuesto en las leyes del Reino y autos acordados, donde se halla ya todo prevenido, cuya ignorancia no era tan culpable por estar dadas estas reglas en varias leyes colocadas en diversos titulos DE LA RECOPIACION, y en autos acorda-*

dos de distintos tiempos, se formase una pragmática que con toda claridad y orden recopilase lo que estaba establecido y mandado en lo tocante á los Escribanos, dándoseles un ejemplar cuando se les despachase el título, etc.

Puesta en práctica esta resolución que se publicó en el Consejo en 15 de abril de 1750, acordó su cumplimiento, y que por los señores D. Juan Ignacio de la Encina y D. José Bermudez, dos de sus Ministros, se formase la instrucción prevenida en aquella, como lo ejecutaron y aprobó dicho Tribunal en 28 de noviembre del mismo año, y se imprimió en 20 de abril del siguiente. En entero cumplimiento de aquella sábia disposición, se entregaba un ejemplar de la *Instrucción de Escribanos*, que así se llamaba, á cuantos de esta clase se examinaban, al tiempo de recibir el título de ejercicio. Pero se estinguió la impresión ó primera tirada, y con ella la costumbre de proveer á los Escribanos del libro de sus deberes, porque nadie cuidó de reimprimirle, y las saludables ventajas que esto producía cesaron de tocarse desde aquel momento.

Quejóse al Rey en aquella época, como antes indicamos, el Cuerpo de Escribanos á consecuencia de esta disposición, del abandono á que se hallaba reducido, y le manifestó su deseo de reconstituirse, para lo que nombró una comisión de su seno encargándola de la redacción de sus estatutos, pero sin que esto pasase de una organización particular de carácter privado, sin embargo de algunas disposiciones reglamentarias muy apreciables que contenía.

Largos años trascurrieron después sin que persona alguna del poder supremo se ocupase del arreglo que tanto necesitaba el Notariado español cuyas atribuciones se

encontraban ya enteramente tergiversadas, cambiadas y confundidas por tantas órdenes y contraórdenes, y tantas y tan perniciosas costumbres abusivas y depresivas todas, como insensible y sucesivamente se habían introducido. En 1830 se pensó al fin en el modo de remediar esta falta que tantos males producía y había ocasionado, y se instruyó un espediente por el suprimido Consejo de Castilla, á fin de consultar á S. M. sobre un proyecto de ley para el arreglo de los Escribanos, formado por don José Lamas Pardo en 1829, en el que comprendió 125 artículos, que tratan con prolijidad unos y con escasez otros de la reforma de todas las clases que componen el Notariado. Pasado, empero, el espediente general á los señores Fiscales, y sin detenerse á combatir el proyecto minuciosamente, le desecharon en su totalidad, con cuyo dictámen se conformó el Consejo por las razones emitidas en él, y en este estado quedaron estos trabajos que por tanto tiempo invirtieron á su autor con un objeto digno de mejor ventura.

Desde aquella época se viene tratando con necesario interés de la manera de plantear una reforma verdadera, muchas veces interrumpida, y esta sin duda es la causa que ha hecho que se deje de poner en este punto toda la vehemente solicitud que su gravedad exige. Trascurridos van ya cerca de 16 años después que por Real decreto de 19 de noviembre de 1834 se mandó crear una Comisión régia con tal objeto, y sin embargo de los numerosos datos que reunió, y de las disposiciones que con posterioridad se han dictado, no se ha conseguido aún formar el tan deseado arreglo del Notariado del modo eficaz que reclama la urgencia de sus necesidades. En el día nos encontramos en un estado, no diremos

igual al de aquel tiempo, sino mucho mas apremiante y anómalo. Las causas se han aumentado, y los abusos lejos de corregirse con la adopción de nuevas reglas, han dado éstas pábulo á su acrecimiento, como llevamos demostrado.

Por el orden que nuestro plan nos permita nos haremos cargo de los trabajos que hizo la Comisión régia indicada y su resultado, de las demas disposiciones que con idéntico fin se han establecido, y por último nos ocuparemos del proyecto de ley pendiente de la discusión del Senado. Ojalá que con nuestro buen deseo acertemos á ilustrar este asunto como merece y exige el servicio público, y que el alto Cuerpo colegislador y el señor Ministro de Gracia y Justicia se penetren de la importancia de esta materia y no desprecien nuestras observaciones que solo tienden á volver por el prestigio del Notariado que queremos que llegue á ser lo que debe en España.

LAZARO DIAZ DE SONSEGA.

REMITIDO.

Sres. Redactores de EL FORO ESPAÑOL.

Muy señores míos: hallándome desempeñando el ministerio fiscal en este partido, y por lo mismo teniendo una absoluta necesidad de entender en la aplicación de nuestras leyes penales, tan luego como han llegado á mis manos los reales decretos de 7 y 8 del corriente, por los cuales se hacen tan importantes reformas en el Código penal y en la ley provisional para su aplicación, me he dedicado al estudio de ellos, y particularmente del segundo, que es de uso mas continuo y perentorio; mas como haya encontrado ciertas dudas sobre su verdadera inteligencia, con el fin de verlas desvanecidas, y cumpliendo con la real orden de 9 último, me he apresurado á redactar las

adjuntas observaciones que he remitido al señor fiscal de S. M. en la Audiencia de este territorio para que se sirva resolver aquellas ó elevar éstas al Gobierno. Sin perjuicio de esto, y convencido de que llegando á manos de todos los jueces y promotores el periódico que Vds. acertadamente dirigen, el estimularlos á que discutan en él es el medio mejor de que la clase procure, en lo que esté de su parte, el acierto en materias que tanto afectan su responsabilidad moral y material; les ruego que, si las consideran dignas de ello, se sirvan insertar en *El Foro* dichas observaciones, emitiendo sobre el objeto de ellas su ilustrada opinión, é invitando á los señores jueces y promotores á que emitan la suya. De este modo, ya que no sea otra cosa, se conseguirá la gran ventaja de uniformar las prácticas de todos los juzgados. Y debo advertir que si mi pobre cuanto improvisado trabajo alcanzase la aceptación de Vds., lo estenderé, en cuanto mis ocupaciones me lo permitan, hasta manifestar mi juicio sobre todas las reformas hechas que creyese merecedoras de la discusión de la prensa.

Dispénsenme Vds. que les cause esta molestia, y aprovechando la ocasión tiene el honor de ofrecerles sus respetos su atento seguro servidor y suscriptor Q. B. S. M.

Jerez de los Caballeros 20 de junio de 1850.

M. AGUADO.

Observaciones sobre algunas de las reformas y adiciones hechas á la ley provisional dictada para la aplicación del Código penal por Real decreto fecha 8 de junio de 1850.

1.º

En la regla que por el art. 3.º se añade con el número 22 se dice que «celebrada la vista con arreglo á la disposición 6.ª, se declaró sentencia, etc.» Esta cita parece estar equivocada, porque no pudiendo referirse la regla 22 añadida mas que á la regla en que por la ley provisional se marca la tramitación de las apelaciones en los juicios por faltas, y habiendo quedado esta regla con el número 17 á virtud del real decreto de 22 de setiembre de 1848, cuya numeración reconoce el de 8 de junio, es claro que lo que debe citar

la nueva regla 22.ª, no es la 6.ª como espresa, sino la 17.ª

2.ª

El párrafo 2.º de la regla 3.ª, dice: « exceptuándose de esta disposición los casos de vagancia y aquellos en que los reos debieren sufrir la pena de prisión por vía de sustitución ó apremio.»

Este párrafo es como se vé una escepcion de la regla general contenida en el que le antecede, pero sobre su genuina inteligencia pueden ocurrir las dudas siguientes=1.ª ¿Se ha tenido presente para la redacción del párrafo copiado la reforma de los artículos 252 y 253 del Código hecha por el art. 37 del real decreto de 8 de junio? Si se ha tenido y tiene ¿la primera parte del párrafo no dejará de ser una escepcion de la regla que le antecede? La escepcion declarada en perjuicio de los que han de sufrir la pena de prisión por vía de sustitución ó apremio, ¿se ha sujetado al sentido literal del art. 49 del Código reformado por el art. 13 del real decreto de junio? Si se ha sujetado y los jueces lo aplican así, ¿no deberá esperarse que no haya un procesado pobre contra el cual deje de proceder siempre la prisión sea cualquiera el delito por que se le persiga? Y puesto que en este caso quedaria falseada por su base la regla sobre detenciones y prisiones, faltándose á toda justicia, ¿no deberá entenderse que la pena por sustitución que autoriza para la detención ó prisión, es la que por su naturaleza y duración sea mayor que la de arresto de 1 á 6 meses?

Antes del decreto de 8 de junio el vago se castigaba en algun caso con la pena de arresto mayor. Siendo así, si la ley creia que la vagancia era delito que por su naturaleza exigia la prisión del reo, establecido que la detención ó prisión no se decretára sino en causas por delitos á que se impusiera mayor pena que la de arresto mayor ó confinamiento menor, hubiera sido consecuente á su creencia, previniendo como escepcion de la regla, que en los casos de vagancia se decretára aquella; mas cuando reformados los artículos 252 y 253 del Código, á la vagancia se señala mayor pena que la de arresto mayor ó confinamiento menor, la escepcion que contra aquella regla se establece es innecesaria: sin ella me parece que ningun tribunal dejaría de prevenir la prisión del

reo dado el caso de que se ha formado una escepcion.

El párrafo 1.º del art. 49 del Código reformado por el art. 13 del decreto de 8 de junio previene que « si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la reparación del daño causado é indemnización de perjuicios, el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio y la multa en que fuere condenado, sufrirá la pena de prisión correccional por vía de sustitución y apremio regulándose á medio duro por cada día de prisión. » Ahora bien: perpetrado cualquier delito y procesada por él una persona que sea absolutamente pobre, como lo son casi todas las que se procesan, será cosa evidente que aunque aquel sea de los muchos que el Código castiga con multa ó arresto mayor, aunque sea mas grave, y el delincuente por haber tenido la participación que se califica de complicidad, de tentativa, de encubrimiento, de conspiración ó de proposición no le amenace mas pena que la de una pequeña multa, deberá ser decretada su prisión si se consulta la letra del párrafo 2.º de la regla 30.ª adicionada, y deberá serlo porque no cabrá duda de que tendrá que sufrir la pena de prisión por vía de sustitución, porque no podrá dudarse de que ha de hallarse en el caso de no tener con que satisfacer la responsabilidad pecuniaria en cuyo defecto viene la prisión. Esto ya se conoce á primera vista que es injusto, que no está con el espíritu del párrafo 1.º de la regla 30.ª citada, y que es contrario á los principios de que nace el derecho de privar á una persona de su libertad mientras no esté declarado delincuente, principios que no son otros que la necesidad de asegurar la imposición de las penas; de consiguiente será preciso entender que la regla en cuestion mas se aviene á la intención del legislador al dictar el párrafo 1.º del art. 49 del Código, que á la letra de él.

La prisión correccional dura de 7 meses á 3 años, el arresto mayor de 1 á 6 meses, aquella se sufre en el establecimiento destinado al efecto dentro de la provincia, éste en la casa pública destinada para ello en la cabeza del partido, ambas son penas de igual indole y naturaleza, el término máximo de la una se toca con el mínimo de la otra; por consiguiente, y cuando á esto hay que agregar que para sufrir la pena mas grave de las dos hay que entrar en procedimientos que están evitados si se aplica la mas leve; no se con-

cibe por qué cuando la insolvencia del reo exige la privacion de su libertad no ha de pasar de 6 meses, ha de ser la prision correccional y no el arresto mayor el que sufra; siendo asi que aun éste por las circunstancias que le son inherentes, guarda mas proporcion con la pena á que sustituye. Por estas razones sin duda, la jurisprudencia ha empezado á sancionar lo que la razon aconseja, y si esta jurisprudencia es la que debe prevalecer, reconociéndose como conforme al artículo 49 del Código, en este sentido habrá que interpretar tambien el párrafo de la regla 30.^a adicionada á las de la ley provisional. Si se trata de un procesado cuya pobreza resulte y al cual sea imputable el delito cuya reponsabilidad pecuniaria deba montar racionalmente á 90 duros, que es el equivalente á los seis meses de arresto mayor, despues del cual entra la prision correccional, decretará la prision, no obstante que el delito por que se proceda no esté castigado con mas pena que la de arresto mayor ó confinamiento menor; mas si este mismo procesado es imputable de otro delito cuya responsabilidad pecuniaria, aunque se comprenda la reparacion del daño causado, la indemnizacion de perjuicios y el resarcimiento de los gastos del juicio, no pase de 90 duros, su detencion ó prision no deberá ordenarse. Pero, ¿para qué acudir á interpretaciones cuando nada era mas fácil que evitar su necesidad? Añádase al párrafo 1.^o del art. 49 reformado por el art. 13 del decreto de 8 de junio, despues de la palabra *sufrirá* y antes de la de *prision*, «proporcionalmente la pena de arresto menor, arresto mayor ó....» y no solo habrán desaparecido todas las dudas que hoy existen, ó que abriga el que suscribe, sino que se habrán sancionado los buenos principios de legislacion penal en que se funda el juriconsulto D. J. F. Pacheco para impugnar el artículo citado.

5.^a

Por la regla 39.^a adicionada se faculta á los jueces para que segun su prudente arbitrio permitan que continúe en libertad el reo de delito á que el Código señala presidio ó prision correccional si dá una fianza de 100 á 500 duros depositados en el Banco, ó de 500 á 2000 en fincas. Por la regla 40.^a se exceptúan de lo dispuesto en la anterior y en la 30.^a en que se ordena que no

se detenga ni prenda á persona alguna que no sea imputable de delito que esté castigado con mayor pena que la de confinamiento menor ó arresto mayor; se exceptúan, digo, los delitos de robo, hurto, estafa, y los de atentado y desacato á la autoridad, en los cuales habrá siempre lugar á la prision del reo, cualquiera que sea la pena que merezca. Estas dos reglas se entienden perfectamente si se tiene presente el 2.^o párrafo del art. 60 del Código, ó si lo que en él se dice respecto á penas es lo que debe entenderse en cuanto á la participacion que puede haber en los delitos, ó mas claro todavía, si asi como por dicho párrafo se previene que cuando la ley señala generalmente la pena de un delito debe entenderse que la impone al delito consumado; del mismo modo y por analogia debe entenderse, que cuando la ley provisional habla de reo de delito, lo hace refiriéndose al reo autor del consumado, y no al reo cómplice, ó al reo autor de tentativa, ó al reo autor de conspiracion ó proposicion. Si esto no es asi, ó si es lo contrario lo que debe entenderse, de seguro me parece que la ley vá mas lejos de lo que la justicia exige y de lo que sus mismas reglas establecen. El robo, el hurto, el atentado y el desacato contra la autoridad se castigan ya en todo caso con penas, que la menor participa de prision ó presidio correccional; la estafa si se castiga alguna vez con arresto mayor, basta la reincidencia en la misma ó semejante especie de delito para que se pene á lo menos con prision correccional; luego si ateniéndose á la índole de estas cuatro clases de delitos, y considerándose que por bien de la moralidad ó del orden público se ha prevenido que no se admitan fianzas para la libertad de los reos, declarando ésta siempre improcedente; se debe comprender que no se ha hecho otra cosa que restringir ó limitar un derecho establecido en favor de aquellos delinquentes que, si dan una prenda como la que se les exige, por lo que es ella en sí, y por las condiciones sociales que hace presumir en el que la facilita, dejan bien asegurada su penalidad. Llevado, empero, esto mas lejos, si la restriccion indicada se estiende á los cómplices del delito consumado, á los autores de tentativa, á los encubridores, á los que conspiran ó á los que proponen la ejecucion del delito, entonces sin haber pendiente en la mayor parte de los casos una pena mayor que la de confinamiento menor ó arresto mayor, tam-

bien faltan las razones especiales para formar una escepcion de los cuatro delitos espresados, tambien falta el temor de que la moral ó el órden público pueda afectarse mediata ó inmediatamente quedando en libertad los que solo participaron ó empezaron á ejecutar tales delitos de la manera indicada.

Por estas razones, pues, para alejar toda duda, y que sea mas fácil uniformar las prácticas de todos los juzgados, conveniente parece que se haga una aclaracion por la cual se prevenga que lo dispuesto en la regla 40 se entienda solo con los autores, ó cuando mas, con los autores y cómplices de los delitos consumados que menciona.

4.ª

El párrafo 2.º de la regla 41 adicionada dice: «Tambien se concederá ésta (la libertad) de oficio, aunque no aparezca la inocencia del procesado, en los casos previstos en las reglas 30 y 39, y bajo las fianzas prevenidas en esta última.» Los casos á que este párrafo quiere ocurrir se imaginan bien. Cometido un delito á que la ley señala una pena que abraza desde el presidio ó la prision correccional hasta otra mayor, ó desde el arresto mayor ó confinamiento menor hasta presidio ó prision correccional, ya atiende en el primer caso á la regla 39, ya en el segundo á la 30, el juez no puede menos de decretar la prision del que crea con motivo racional que es culpable de él. Recibida indagatoria al procesado, evacuadas las citas que hiciere, y ampliada la pesquisa, se viene en conocimiento de que por las circunstancias del hecho ó del que lo ejecutó, éste no debe sufrir mas que el grado mínimo de la pena, y en este caso, lo mismo que por darse el de que el encausado no aparece sino cómplice ó encubridor del delito, y por lo tanto que no tiene que sufrir mas pena que la inferior en uno ó dos grados á la legal; tan procedente como fué su prision lo será el que se ponga en libertad. Hasta aquí nada mas sencillo ni mas inteligible; pero pasemos adelante. El párrafo dice: «y bajo las fianzas prevenidas en la regla 59.» Estas fianzas, la fianza de 100 á 500 duros en el Banco, ó de 500 á 2,000 en fincas, se le han de exigir lo mismo al preso que pudiendo ser castigado con prision mayor se ha averiguado que no es digno mas que de prision correccional, que al preso por ser presun-

to autor de delito á que la ley señala arresto mayor ó presidio correccional, y que se descubre que no es acreedor mas que á la primera pena ó á otra menor?

Si no se atiende mas que al sentido gramatical del párrafo, yo tengo por cierto que lo mismo en un caso que en otro la libertad no procede sin la fianza prévia que establece la regla 39; pero si se considera que el segundo caso no se daría muchas veces si el procesado hubiere facilitado desde luego la fianza que la ley pide; si se tiene presente que toda fianza, y en materia criminal mas que en ninguna, debe guardar proporción con la cosa ú obligación afianzada; si se piensa en que la regla 30 viene á ser la fijación del principio que pone límite á la libertad individual, sancionando que para que una persona sufra arresto mayor ó confinamiento menor no hay necesidad de tenerla encarcelada mientras se le esté encausando; me persuado de que las fianzas de que habla el párrafo de que me ocupo, no se refieren mas que al caso de la regla 39, y que para los de la 30 ninguna fianza se necesita, sino que luego que el reo no aparezca merecedor de mas pena que de la que ella menciona, se le debe poner en libertad.

Contra esto puede objetarse que si el juez por malicia ó mala inteligencia no aprecia bien la imputabilidad del procesado, se compromete ó arriesga la imposición de una pena grave; pero como lo mismo puede decirse respecto á la aplicación de la regla 30, porque no es imposible la equivocación en calificar el delito que se persiga, y por consiguiente en la pena que esté señalada para él, ninguna fuerza tiene el argumento, y será preciso convenir en que sin torcer el espíritu de la reforma hecha por el decreto de 8 de junio, sin que se falte á uno de los propósitos de éste espresados en la esposición que le precede, no es posible entender el párrafo de que me ocupo, lo mismo que el 2.º de la regla 30, en el sentido indicado. De otro modo en vez de ponerse en consonancia y armonía las disposiciones que afianzan la seguridad individual, lo cual es uno de los fines á que tiende terminantemente la reforma, estaría ésta en abierta contradicción con aquella; y ya que se quieran remover dudas y obstáculos, que alguna vez, se dice, embarazan la acción de las autoridades y tribunales, conveniente será para el mismo propósito de la re-

forma que se desvanezcan las que en esta se encuentran.

Las leyes criminales de hoy son muy nuevas y cambian las prácticas de los juzgados. Así, si se ha de proceder con uniformidad y sin la zozobra que es propia de los que estando entregados á sí mismos desean acertar en la administración de justicia tan penosa como incompatible con largos estudios y meditaciones, nada será mas conveniente, y nada tan necesario como el que una ley de aplicación diaria tenga tal claridad que no produzca dudas, ni aún para aquellos que por haber aprendido en tiempos en que no estaba generalizada la ciencia de la legislación, les es doblemente difícil aplicar preceptos basados en ella, y no en aquellos principios que reinaban cuando en siglos remotos nació nuestra legislación, ó cuando se introdujo la jurisprudencia que se ha abolido hace dos años, publicándose un Código en armonía con las necesidades sociales existentes. Movido, pues, el que suscribe del deseo de que así suceda, se apresura á presentar las ligeras observaciones que preceden, esperando que si se creen dignas de atención se eleven al conocimiento del gobierno de S. M. á los efectos indicados.

Jerez de los Caballeros 20 de junio de 1850.

MANUEL ANGULO.

PARTE OFICIAL.

(Gaceta del 14 de junio.)

SENTENCIAS Y DECISIONES

DE LOS

TRIBUNALES SUPREMOS.

CONSEJO REAL.

Dirección de gobierno.

Conclusion.

Que contra este bando propusieron los interesados, y les fué otorgado por el juez de primera

instancia de Tafalla, un interdicto restitutorio, del cual apeló y pidió la revocación el ayuntamiento, no habiéndose accedido mas que á la alzada; y como antes de mostrarse parte en ella ante la Sala primera de la Audiencia referida, acudiese esta corporación al jefe político para que provocase el conflicto, se dirigieron también al mismo los propietarios con la pretensión contraria, sometiéndole entre otras consideraciones las siguientes, de que también se había hecho mérito en las diligencias anteriores, y se hizo luego ante aquella Sala:

Primera. Que desde la formación del primer catastro de la villa en tiempo de la guerra de la Independencia, se hallaban incluidos en las hojas de los esponentes los corrales y tierras en cuestión, y pagaban por ellos la contribución correspondiente.

Segunda. Que dichos corrales y tierras habían sido transmitidos por herencia, contrato y demás títulos legítimos desde tiempos lejanos, formando algunos parte de mayorazgos fundados había tres siglos; pero no obstante, el jefe político, oído el Consejo provincial, y de conformidad con su parecer, requirió la inhibición á la Sala, fundado en los artículos 74, párrafo quinto, y 80, párrafo segundo de la ley de Ayuntamientos, y en la Real orden de 8 de mayo de 1839, resultando la presente competencia:

Vistos los artículos y párrafos citados de la ley de 8 de enero de 1845, el primero de los cuales atribuye al alcalde, como administrador del pueblo, y bajo la vigilancia de la administración superior, el cuidado de todo lo relativo á policía urbana y rural, conforme á las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad superior y ordenanzas municipales, y el segundo declara atribución de los ayuntamientos arreglar por medio de acuerdos, conformándose con las leyes y reglamentos, el disfrute de los pastos, aguas y demás aprovechamientos comunes en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente:

Vista la Real orden también citada de 8 de mayo de 1838, que rechaza los interdictos de amparo y restitución para dejar sin efecto las providencias de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de su atribución según las leyes:

Visto el art. 1.º de las Ordenanzas generales

de Montes de 22 de diciembre de 1833; según el cual bajo la denominación de montes, para los efectos de dichas ordenanzas, se comprenden todos los terrenos cubiertos de árboles á propósito para la construcción naval ó civil, carboneo, combustible y demás necesidades comunes, ya sean montes altos, bosques, sotos, plantíos ó matorrales de toda especie distinta de los olivares, frutales ó semejantes plantaciones de especial fruto ó cultivo agrario:

Considerando, primero. Que el ayuntamiento de Falces, así en los términos del bando de que se trata, como en la plicación directa é inmediata que hizo del mismo á D. Romualdo Ochagavía y demás interesados, partió del supuesto de que toda tierra ó corral comprendido en los llamados montes del término era de la pertenencia del común, ó si había pasado á serlo de algún particular era con la restricción de no poderla arrendar ni vender á forasteros.

Segundo. Que este supuesto es inexacto, en primer lugar porque la misma concordia que se trataba de aplicar había reconocido en 1773 que entre dichas tierras y corrales los había de propiedad particular; y que ésta en el hecho de recaer sobre fincas de tal naturaleza, no llevaba consigo la espresada restricción en sus arrendamientos, sino que por el contrario en la circunstancia de ser dominio privado iba envuelta la libertad absoluta para disponer de las mismas: en segundo lugar porque la vinculación de algunos de estos terrenos, la sucesión libre en otros desde largo tiempo por los títulos comunes del derecho y el hallarse generalmente comprendidos en el carácter público como pertenencias de particulares, imponiéndose á los poseedores las contribuciones públicas en el concepto de dueños, demuestran que una parte de dichos montes dejaron de pertenecer de hecho al común hace bastantes años; y últimamente porque la concordia que se trata de cumplir fue suspendida, si no revocada, por el decreto de la Diputación provincial de 30 de marzo de 1839, habiendo estado en inobservancia hasta diciembre de 1848 en que se pidió su restablecimiento.

Tercero. Que por lo mismo el bando del ayuntamiento no tuvo por objeto mantener el último estado de cosas, destruyendo las alteraciones que hubiesen podido introducir en él usurpaciones recientes, sino por el contrario destruir ese estado

en que había intervenido la autoridad pública restableciendo otro anterior, y al mismo tiempo no se limitó á dictar medidas de buen orden en el uso de los aprovechamientos comunes, sino que se declaró asimismo en posesión de derechos y preeminencias que solo pueden corresponderle bajo el carácter de persona moral con arreglo al derecho común, y que con sujeción al mismo cabe que por otras sean adquiridos.

Cuarto. Que en ambos respectos el bando del ayuntamiento está notoriamente fuera de los límites de las atribuciones cometidas al mismo y al alcalde por los artículos y párrafos citados de la ley de 8 de enero de 1845, y no puede de consiguiente aplicarse la Real orden igualmente citada de 8 de mayo de 1839.

Quinto. Que tampoco puede invocarse la competencia de la administración, atendiendo á que se trata de montes comunes, pues los que así se titulan en este caso no reúnen las circunstancias que requiere el art. 1.º de las ordenanzas citadas para que sean objeto de la solicitud especial é intervención directa é inmediata del gobierno;

Oído el Consejo Real, Veugo en decidir esta competencia á favor de la autoridad judicial.

Dado en Palacio á 31 de mayo de 1850.—Está rubricado de la Real mano.—El ministro de la Gobernación del Reino—El conde de San Luis.

(Gaceta del 8 de junio.)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

NOMBRAMIENTOS.

La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien dictar las resoluciones siguientes:

Magistrados.

En 20 de mayo. Declarando cesante á don Francisco de los Rios Rosas, presidente de la Sala de la Audiencia de Barcelona, con los honores y el sueldo que por clasificación le corresponde.

Jueces de primera instancia.

En 17. Promoviendo á D. Jacinto Cabestani, juez de Montblanch, al juzgado de Callosa de Enzarriá.

Promotores fiscales.

En id. Jubilando á D. Lorenzo Roldan, promotor fiscal de Ciudad-Rodrigo, accediendo á su solicitud.

Promoviendo á la promotoria de Ciudad-Rodrigo á D. Ramon Colsa y Pando, promotor fiscal de Alba de Tormes.

Nombrando á D. Francisco Bas para la promotoria fiscal de Villareal.

A D. Mariano del Mazo para la de Astudillo, vacante por salida á otro destino del que la servia.

A D. Francisco Calvente para la de Mancha Real, vacante por salida del que la servia á otro destino.

En 24. Jubilando á D. José Saavedra Cueto, promotor fiscal de Lorca, accediendo á su solicitud.

Nombrando para la promotoria de Lorca á D. Eulogio Saavedra Perez de Meca, que la sirva en comision.

Separando á D. Manuel Cano Jimenez de la promotoria fiscal de Cazorla, y nombrando en su lugar á D. José Calonge.

Escribanos.

Concediendo Reales cédulas:

En 17. A D. Serapio Melchor y Mayor de propiedad y ejercicio de una escribania numeraria en la villa de Villafranca de Montes de Oca.

A D. Manuel Nuñez Delgado de otra de Sanlúcar de Barrameda.

A D. Joaquin Llavari y Bals para ejercer otra de Bruñola.

A D. José María Enriquez para otra de Valdeorras.

A D. Francisco de Paula Cincúnegui para otra de Bolea.

A D. José María Delgado para otra de las alcaldías de Villar de Vos y Rios.

A D. Pedro Leon Gonzalez para otra de Hoyos.

En 31. A D. Ramon Martinez Conde para

ejercer una escribania de Cámara de la Audiencia de Burgos.

Al mismo D. Ramon Martinez Conde de propiedad de una escribania numeraria de la villa y concejo de Pravia.

A D. Bernardo Valcárcel y Neira para ejercer otra de Arroyo del Puerto.

Y á D. Alejandro Urrea para otra de Estella.

Procuradores.

En 24. Nombrando á D. Cándido Guerrero para ejercer una plaza de procurador en la ciudad de Toledo.

A D. Tomás Calderon para una plaza de procurador del juzgado de Vigo.

A D. Tomás Arroyo para otra del juzgado del Puente del Arzobispo.

A D. Cayetano Sanchez para otra del de Alcañices.

A D. Francisco Berenguer para otra del de San Feliu de Llobregat.

A D. Santiago Benito de Castro para otra de Santiago.

A D. Ramon Inglés para sustituir por don Francisco Vicente Barberá otra del juzgado de Játiva.

En 31. Concediendo Real cédula de ejercicio de procurador de número de la Audiencia de Sevilla á D. Francisco de Paula Rodríguez.

Nombrando á D. Manuel Sancho para una plaza de procurador del juzgado de Caspe.

A D. José Tolla para otra de la Audiencia de la Coruña, en calidad de teniente de D. Ramon de Neira y Torre.

Y á D. Antonio Benito Carvallo para otra igual plaza en la misma Audiencia, en calidad de teniente de D. Antonio Benito Fernandez.

ULTRAMAR.

En id. Nombrando para la alcaldía mayor de Mayagües, en la isla de Puerto Rico, á D. Florencio de Ormaechea, oficial auxiliar del Ministerio de Gracia y Justicia, por promocion del que la servia á otro destino.

En 24. Concediendo la notaria de Indias, que se halla vacante en el colegio de la Habana, al licenciado D. Fernando Galves.

(Gaceta del 20 de junio.)

REAL ÓRDEN.

La Reina (Q. D. G.) se ha servido declarar que los que hubieren concluido la carrera del notariado pueden optar, según sus méritos y circunstancias, á oficios de procuradores de los tribunales y juzgados sin necesidad de otros estudios ni práctica especial.

Madrid 19 de junio de 1850.—Arrazola.

(Gaceta del 21 de junio.)

La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien dictar las resoluciones siguientes:

Magistrados.

En 7 de junio. Admitiendo la renuncia hecha por D. Francisco Palau de la regencia de la Audiencia de Cáceres.

Nombrando para este cargo á D. Nicolás Peñalver, fiscal de la de Barcelona.

Para la fiscalía de esta Audiencia á D. Antonio Maria Escudero, oficial de la Dirección de lo contencioso de Hacienda.

Promoviendo á D. Pantaleon Luzás, Magistrado de la Audiencia de Barcelona, á una presidencia de Sala en la de Albacete.

Nombrando á D. Manuel Feijóo y Rio, gobernador que ha sido de la provincia de Lugo, para una plaza de Magistrado de la Audiencia de Pamplona.

Jueces de primera instancia.

En id. Nombrando para el juzgado de primera instancia de Rute á D. Francisco de Asis Villalba y Dominguez, que lo servia interinamente.

En 14. Declarando cesante á D. Sebastian Guillen, juez de primera instancia de Torrijos.

Promoviendo a D. José Maria Ulloa, juez de Becerreá, al juzgado de Monforte, y nombrando á D. Martin Maroto Calderon, juez cesante de Igualada, para el juzgado de Sariñena.

Promotores fiscales.

En id. Nombrando á D. Modesto Blanco para la promotoria fiscal de Alcaráz.

Admitiendo la renuncia que D. Plácido García de Vinuesa ha hecho de la promotoria fiscal de Zafra.

Y nombrando para esta promotoria á D. Domingo de la Calzada y Barroso.

Escribanos.

En 7. Concediendo Reales cédulas:

A D. Manuel Alarcon y Almohalla, de propiedad y ejercicio de una escribanía numeraria de Antequera.

A D. Vicente Chulvi y Cantos, de otra de Jumilla.

A D. José Anievas y Valdés para ejercer otra de Fuente de Cantos.

A D. José Maria Lamas, para otra de la alcaldía del distrito de Labadores.

A D. Manuel Maria Vazquez para otra de la alcaldía de la Peroja.

A D. Manuel Marcó y Gil para otra de los distritos de Calbenia y Santiago de Capela.

A D. Guillermo Gomez Codórniga, para otra de Torrelavega.

A D. Roque de Agra para otra de Amociro.

Y á D. Bartolomé Vasco para otra de Baños.

ULTRAMAR.

En 14. Declarando vacante la notaría del colegio de la Habana, hecha en favor de D. Bartolomé Fanes, por no haber obtenido la Real cédula en el término correspondiente, y nombrando en su reemplazo para dicha notaría á D. Rufino Pacheco.

En id. Otorgando Real confirmacion de sus respectivos oficios:

A D. Francisco Vicente de Orbeta, escribano público de la ciudad de Manila.

A D. Joaquin Lezcano, anotador de hipotecas de Guanabacoa en la isla de Cuba.

Y á D. Pedro Llesandi, procurador de causas procesales del puerto de Mariel, de la misma isla.

(Gaceta del 24 de junio.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL REINO.

Direccion de Gobierno.

Pasado al Consejo Real para los efectos prevenidos en el Real decreto de 27 de marzo último en el expediente remitido por V. S. á este Ministerio en 20 del mes próximo pasado con la ampliacion que se le previno en 23 de abril anterior, dando cuenta de haber negado al juez de primera instancia de Jaca la autorizacion que le habia pedido para procesar á D. Joaquin María Gonzalez, jefe civil que fué de aquel distrito, ha consultado en 13 del actual lo siguiente:

« En el expediente sobre autorizacion para procesar al jefe civil de Jaca D. Joaquin María Gonzalez, del que resulta que este funcionario detuvo á varias personas, unas como sospechosas por los indicios que contra ellas resultaban, y otras por orden de la autoridad superior política de la provincia. Con antelacion á estas detenciones se habia declarado aquel partido en estado de sitio por temor de ser invadido el territorio por los que en el vecino reino de Francia se reunian para trastornar el orden en la Peninsula, reasumiendo la autoridad militar todas las facultades, y particularmente las que tenian relacion con la conservacion del orden público.

El gobernador militar de aquella plaza le encargó en distintas ocasiones la mas esquisita vigilancia respecto á las personas que pasasen ó pernatasen en la misma, arresando á las que infundiesen sospechas, asi como á las que resistiesen á las órdenes de la autoridad, haciendo al mismo tiempo el mas cumplido elogio por la actividad y celo de aquel jefe civil, quien inmediatamente ponía en libertad á los que infundian sospechas tan luego como eran desvanecidas.

En su vista, y considerando que D. Joaquin María Gonzalez, aunque detuvo á varias personas, lo hizo en unas ocasiones por orden de la autoridad superior política de aquella provincia, y en otras como delegado de la autoridad militar que reasumia todas las facultades de correccion y orden por estar aquel distrito declarado en estado de sitio; no pudiendo por lo tanto decirse que obró arbitrariamente dicho jefe civil, ni tam-

poco atribuirsele mala fé al adoptar aquellas disposiciones:

El Consejo, de acuerdo con el de la provincia de Huesca, opina puede V. E. servirse consultar á S. M. se deniegue al juez de primera instancia de Jaca la autorizacion que habia solicitado para procesar á D. Joaquin María Gonzalez, jefe civil de aquel distrito.»

Y habiéndose dignado S. M. resolver como parece al Consejo, lo comunico á V. S. de Real orden para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de junio de 1850.—San Luis.—Sr. Gobernador de la provincia de Huesca.

Parece que se están copiando para presentarlos á la sancion los Códigos Civil y de Procedimientos, que se asegura saldrán muy pronto á luz pública. Esperamos con avidez su aparicion para ocuparnos con detenimiento de sus disposiciones.

—Tambien se habla de la ley orgánica de los Tribunales y de las modificaciones que en ella van á tener lugar, tomando siempre por base el mayor sueldo de los empleados de la administracion de justicia.

—Nunca serian mas útiles que ahora los trabajos de la Comision de Códigos, en atencion á la revision que debe hacerse de los que pronto van á ser ley, si aquella se compusiera de los elementos convenientes á su objeto. Seria ante todo muy equitativo nombrar jurisconsultos de aquellas provincias que antes formaban reinos separados de la Corona de Castilla para consultarles acerca de algunas disposiciones del Código Civil, porque es muy delicado este punto y deben respetarse intereses muy elevados, que es posible salgan mal parados de medidas absolutas. En cuanto á los procedimientos podemos asegurar que son dignos de consideracion algunos que rigen en Aragon y Cataluña que pueden aplicarse sin inconvenientes al resto de España. Tanto para esto como para la revision, ordenamiento y esmerada redaccion de dichos Códigos, es de todo punto indispensable que se reunan los ilustrados miembros de la Comision, á los cuales debe agregarse mayor número y que discutan sobre tan interesantes materias.